



Roj: **AAP B 4139/2021 - ECLI:ES:APB:2021:4139A**

Id Cendoj: **08019370032021200262**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **3**

Fecha: **12/04/2021**

Nº de Recurso: **201/2021**

Nº de Resolución: **329/2021**

Procedimiento: **Recurso de apelación. Procedimiento abreviado**

Ponente: **EDUARDO NAVARRO BLASCO**

Tipo de Resolución: **Auto**

AUDIENCIA PROVINCIAL

BARCELONA

SECCIÓN 3ª

ROLLO APELACIÓN Nº 201/2021

DILIGENCIAS PREVIAS Nº 893/2010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE Cerdanyola del Vallés

A U T O 329/21

Tribunal:

D. EDUARDO NAVARRO BLASCO

Dª. MYRIAM LINAGE GÓMEZ

Dª. Mª CARMEN MARTÍNEZ LUNA

En la ciudad de Barcelona a 12 de abril del año 2021.

Dada cuenta y siendo ponente el D. EDUARDO NAVARRO BLASCO, quien expresa el parecer unánime del tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 22 de octubre de 2019 por el Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Cerdanyola del Vallés se dictó auto en las diligencias antes referenciadas, seguidas por presuntos delitos contra el medio ambiente, prevaricación por omisión y lesiones a partir de la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Roman en su condición de director de la empresa "LAFARGE CEMENTOS, SA", Ruperto como alcalde en la fecha en la que ocurrieron los hechos del Ayuntamiento de Montcada i Reixac y Angelica como concejal de medio ambiente del mismo Ayuntamiento en esa época, en cuya parte dispositiva se acordaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones por considerar no debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa.

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, contra la misma se interpuso por la representación procesal de la AGRUPACIÓ DE VEÏNS DE CAN SANT JOAN, formalmente personada como acusación particular, recurso de reforma y subsidiario de apelación.

Desestimado el primero por auto de 18 de septiembre de 2020, en la misma resolución se admitió el de apelación al que se le ha dado el trámite previsto legalmente por el Juzgado de Instrucción.

El Ministerio Fiscal ha presentado escrito de oposición al recurso y en los mismos términos se han expresado las respectivas representaciones procesales de los tres investigados.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales exigidas al efecto.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se asumen y dan por reproducidos los de la resolución impugnada y los de aquéllas otras de las que trae causa.

SEGUNDO.- El auto impugnado fundamenta el sobreseimiento provisional en la ausencia de indicios suficientes de la comisión de los delitos imputados por parte de los investigados inicialmente querellados, y lo hace a partir del resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción, tanto aquéllas acordadas inicialmente como las ordenadas por esta Audiencia Provincial tras la revocación de un primer auto de sobreseimiento de fecha 27 de febrero de 2013, a las que se refiere de forma expresa y valora debidamente tanto en el auto inicial como en el que desestima la reforma. Tal afirmación desmiente y desvirtúa por sí misma el primero de los motivos de impugnación invocados por la apelante, que no es otro que la pretendida ausencia de valoración de las diligencias practicadas (a las que denomina como pruebas) que, de ser cierto, necesariamente provocaría indefensión y que podría provocar la nulidad de la resolución, pretensión que por otra parte no se hace valer en el recurso que solicita exclusivamente la revocación y la práctica de nuevas diligencias.

TERCERO.- Y en un sentido muy similar se expresan los otros dos motivos invocados que inciden también en la pretendida indefensión ocasionada tanto por la falta de respuesta a las alegaciones previas de parte como a anteriores escritos de ampliación de los hechos que, a su juicio, deberían también ser investigados relativos a la contaminación atmosférica y del suelo, cuando la querella inicial interpuesta por la fiscalía se centraba esencialmente en la posible contaminación acústica.

Aunque mantenemos que las resoluciones del juez de instrucción dan cumplida respuesta a tales alegaciones, lo que sería suficiente para desestimar la totalidad de los motivos y por tanto el recurso, entendemos que en su desarrollo se hacen referencia a cuestiones de fondo sobre los indicios delictivos que puedan desprenderse de las diligencias practicadas que merecen ser analizadas en toda su extensión.

CUARTO.- Aunque no forma parte del contenido del recurso, hay que referirse con carácter previo al fallecimiento del investigado Ruperto, hecho al que se refiere tanto el escrito de impugnación de su defensa como el auto que desestima la reforma. Tal circunstancia, una vez resulte constatada de forma fehaciente, ha de llevar necesariamente al sobreseimiento libre parcial respecto del mismo por aplicación de lo previsto en el art. 130.1.1º CP que determina la muerte del reo como una de las causas de extinción de la responsabilidad criminal.

QUINTO.- Para referirse a la imposibilidad de practicar nuevas diligencias conviene reproducir brevemente la cronología del proceso contenida en el informe del Ministerio Fiscal por el que se solicitaba el sobreseimiento (y no debe olvidarse que fue su querella la que produjo la incoación de las presentes diligencias previas):

* Querella del fiscal de medio ambiente y urbanismo de Barcelona presentada el 07/06/2010 por un presunto delito medioambiental del art. 325.1 CP relacionado tanto con la contaminación atmosférica como acústica imputado a Roman, un delito de prevaricación medioambiental por omisión del art. 329.1 CP imputado a Ruperto y a Angelica y tres delitos de lesiones del art. 147 CP.

* Auto de 23/12/2010 por el que se admite a trámite la querella y se incoan las correspondientes Diligencias Previas.

* Personación como acusación particular de la AGRUPACIÓN DE VEÍNS DE CAN SANT JOAN.

* Auto de 27/02/2013 por el que se acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones a la vista de las diligencias practicadas hasta ese momento, a la vez que se deniegan las solicitadas por el Ministerio Fiscal. Resolución que fue objeto de recurso y resultó finalmente revocada por auto de esta Audiencia provincial que ordenaba la práctica de las diligencias denegadas y la incorporación de la nueva documentación requerida.

* En fecha 20/04/2016 se declaró la complejidad de la causa prorrogando el plazo máximo de instrucción por un periodo de 18 meses que finalizó el 20 de octubre de 2017. Dentro del mismo se incorporó el atestado que contenía el informe pericial sobre las pruebas sonométricas practicadas en los términos acordados con el resultado que obra en las actuaciones.

* Las defensas solicitaron nuevamente el sobreseimiento y, conferido traslado a las partes, el Ministerio Fiscal emitió un extenso informe (presentado el 06/04/2018) por el que se adhería a tal pretensión por las razones que se exponen en el mismo.

* Por auto de fecha 22/10/2019 se acuerda por el juzgado el sobreseimiento provisional contra el que la acusación particular ha presentado el recurso que ahora nos ocupa.

La primera consecuencia que se deriva de la anterior cronología procesal es la determinación temporal de los hechos investigados que, como bien determina el fiscal en su informe, alcanzan a los acontecidos entre el 7 de junio de 2005 y el 7 de junio de 2010 en cuanto a los imputados al Sr. Roman y pueden retrotraerse hasta el 7 de junio de 2000 en cuanto a la conducta de los otros dos investigados, atendidos los respectivos plazos de prescripción de los distintos delitos. Ello implica que las referencias que hace la acusación particular a hechos acontecidos fuera de ese periodo queden necesariamente fuera de la investigación. No puede admitirse por tanto la pretensión de que se abra una nueva línea de investigación sobre hechos nuevos siete años después sobre hechos ya prescritos, como es el caso de la posible contaminación del suelo.

Por otra parte, resulta imposible la práctica de nuevas diligencias con posterioridad al 20 de octubre de 2017, fecha en la que finalizó el plazo de instrucción previsto en el art. 324 LECrim tras la declaración de complejidad de la causa, tal y como se ha hecho constar anteriormente.

SEXTO.- Así las cosas, habrá que valorar la entidad de los indicios de criminalidad que puedan existir respecto de los dos investigados supervivientes exclusivamente a partir del resultado de las diligencias practicadas. Es posible que una instrucción inicial más eficiente hubiera aportado más y mejores elementos de juicio, e incluso que la decisión definitiva hubiera sido distinta pero, a la vista de los elementos indiciarios con los que contamos, compartimos la adoptada por el juez de instrucción.

Por lo que se refiere al delito medioambiental imputado al Sr. Roman en cuanto a la contaminación atmosférica, no existe indicio alguno de que existiera incumplimiento administrativo por parte de la empresa, que actuó en todo momento bajo la autorización ambiental integral concedida por el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (órgano competente para emitir tales licencias) y que concluyó que el impacto global se consideraba moderado. Los posteriores controles tampoco acreditan que las emisiones de partículas nocivas a la atmósfera superaran los límites legalmente establecidos.

En cuanto a la pretendida contaminación acústica, las pruebas sonométricas llevadas a cabo con la fábrica parada determinaron que el nivel de ruido ambiental ajeno a ésta alcanzaba por sí sólo un impacto entre 45,2 y 45,8 decibelios, muy cercano al límite legal de 55 db, que se atribuye a las infraestructuras de transporte que rodean la zona. es por ello que la superación del límite legal que en momentos puntuales haya podido producirse no puede imputarse exclusivamente al funcionamiento de la empresa, y no puede olvidarse que para la comisión del delito la jurisprudencia viene exigiendo, además del elemento objetivo de la superación de los mencionados límites, que la influencia del agente concreto sea determinante y decisiva, circunstancia que no se aprecia en el presente caso, al menos con entidad suficiente como para continuar el procedimiento penal.

Por lo que respecta al presunto delito de prevaricación por omisión, y dejando al margen la conducta de quien fue alcalde de Montcada i Reixac durante parte del periodo investigado por razón de su fallecimiento al que ya nos hemos referido anteriormente, hay que tener en cuenta que la otra investigada, la Sra. Angelica, ésta cesó en su cargo de concejala de medio ambiente en julio de 2011 por lo que sólo procederá valorar su conducta con anterioridad a esa fecha. En cualquier caso, si atendemos a la extensísima documental obrante en autos, la actuación del Ayuntamiento en sus funciones de control medioambiental respecto de la empresa en ningún modo pueden calificarse de pasivas sino que consta una continua intervención activa desde la década de los años noventa del pasado siglo hasta el punto de haber llevado a cabo alegaciones contra las decisiones de la Generalitat de otorgar las correspondientes licencias ambientales sobre cuyo otorgamiento el órgano municipal carece de competencias administrativas. Y consideramos, de la misma forma que hace el juez de instrucción y en contra de lo que pretende la acusación particular, que se llevó a cabo una acción de intervención activa suficiente, al menos en el periodo en el que la Sra. Angelica estuvo a cargo de la concejalía de medio ambiente.

Por último, y por lo que se refiere al delito de lesiones, no ha resultado acreditada la relación causal con los hechos que se investigan y, en todo caso, no pueden relacionarse con un delito medioambiental que tampoco se considera acreditado.

SÉPTIMO.- Por todo lo anterior procede la desestimación del recurso, confirmando la resolución apelada. No debe olvidarse que no sólo es derecho de todo ciudadano verse apartado de un procedimiento penal cuando no existen indicios suficientes contra el mismo, sino obligación del juez de instrucción la de dejarlo fuera cuando ningún motivo racional existe para lo contrario.

OCTAVO.- Conforme a los artículos 239 y 240 de la LECrim, procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

VISTOS los artículos mencionados y demás de general y pertinente aplicación



PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la AGRUPACIÓ DE VEÏNS DE CAN SANT JOAN contra el auto de fecha 22 de octubre de 2019 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Cerdanyola del Vallés por el que se acordaba el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL de las actuaciones y CONFIRMAR dicha resolución, si bien la decisión respecto del investigado Ruperto deberá ser la de SOBRESEIMIENTO LIBRE PARCIAL una vez se constate fehacientemente su fallecimiento; declarando de oficio las costas del recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno, remítase testimonio de la misma al Juzgado de Instrucción y, verificado todo ello, procédase al archivo del presente rollo.

Así lo acordó la Sala, y firman los magistrados expresados al margen superior

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.